

EDITORIAL

Ante la profundización del conflicto político militar y la agudización de la crisis socio-económica, la mayor intervención del Estado debería de plantearse como una necesidad perentoria, ya que históricamente el Estado se ha visto como el único que puede asegurar la subsistencia del interés social.

En la coyuntura actual, el que hacer del sector público se ha venido ampliando, ya sea para compensar la pérdida de dinamismo de algunos sectores, o ya para cubrir algunas áreas que antes eran de exclusividad del sector privado.

Sin embargo, en El Salvador de hoy el problema no parece ser de cuánto, sino de cómo intervenir.

Ha sido, justamente, esa actuación del gobierno salvadoreño la que ha colocado al país sobre un delgado hilo tendido sobre el precipicio del descalabro total.

Por una parte, las reformas emprendidas se han empantanado sin lograr ningún efecto redistributivo; representado, en cambio, un elevado costo social. Este señalamiento no apunta, de modo alguno, hacia la reversión de las reformas, sino por el contrario, hacia la profundización y ampliación de las reformas para un efectivo cambio estructural de la base económica, y no para "arrebatar banderas" u otros objetivos semejantes.

Por otra parte, el enfoque del conflicto político militar y la estrategia para resolverlo se identifican con intereses específicos que buscan imponerse sobre las

grandes mayorías populares, haciendo caso omiso del clamor popular y de sectores democráticos nacionales e internacionales por una solución política a través del diálogo. Las políticas económicas no son neutras y, por lo tanto, constituyen un componente importante de la estrategia.

La esencia del Estado salvadoreño y de su política económica no debe de buscarse en la dialéctica del discurso, sino en la dialéctica de sus actuaciones reales y concretas.

Las respuestas a las demandas de los trabajadores de la administración pública no están ofreciendo ninguna solución racional y positiva, sino por el contrario, se anatematiza, se amenaza y se distorciona los hechos.

Otro tanto ocurre con las políticas económicas, se ha enfatizado que "estamos dispuestos a adoptar las medidas que se precisen y vamos a ejecutarlas y desde luego, con toda energía a sancionar aquellos que...desnaturalicen las medidas...", pero en los hechos, tal energía se ejerce unilateralmente. A la infinidad de demandas de sectores populares por rectificaciones de aquellas medidas que les afectan se les responde, en el mejor de los casos, con la indiferencia; por el contrario, cuando los grandes agroexportadores, industriales o comerciantes cuestionan las políticas se negocia, se cede y se "desnaturaliza".

